

# Estructuras económicas, sociales e institucionales

## La reproducción de la pobreza y la desigualdad en Ecuador

**Andrés Mideros Mora**

Pontificia Universidad Católica, Ecuador  
amideros060@puce.edu.ec

**Carolina Sánchez Pilco**

Pontificia Universidad Católica, Ecuador  
asanchez679@puce.edu.ec

Fecha de recepción: 13/12/2024  
Fecha de aceptación: 15/4/2025

### Resumen

La pobreza y la desigualdad no son coyunturales ni atribuibles solo a características individuales, sino que se reproducen en la interacción entre estructuras económicas, sociales e institucionales. La baja productividad, las economías de enclave y la precariedad laboral se integran con el racismo y el machismo. Sin un Estado que garantice derechos y redistribuya la riqueza, estas condiciones persisten en ciertos territorios y grupos. El análisis del caso ecuatoriano (2019–2023) a nivel provincial muestra que la pobreza está determinada por la desigualdad, la falta de servicios públicos, la ausencia de seguridad social, las disparidades étnicas y la primarización económica. Lo anterior demuestra la prevalencia de brechas estructurales que reproducen la pobreza y la desigualdad.

Tramas  
y Redes  
Jun. 2025  
Nº8  
ISSN  
2796-9096

### Palabras clave

1| Pobreza 2| Desigualdad 3| Seguridad 4| Brechas estructurales 5| Ecuador

### Cita sugerida

Mideros Mora, Andrés y Sánchez Pilco, Carolina (2025). Estructuras económicas, sociales e institucionales: La reproducción de la pobreza y la desigualdad en Ecuador. *Tramas y Redes*, (8), 97-125, 80da. 10.54871/cl4c80da



Esta obra está bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es\\_AR](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_AR)

## **Estructuras económicas, sociales e institucionais: A reprodução da pobreza e da desigualdade no Equador**

### **Resumo**

*A pobreza e a desigualdade não são conjunturais nem determinadas apenas por características individuais, mas se reproduzem na interação entre estruturas econômicas, sociais e institucionais. A baixa produtividade, as economias de enclave e a precarização do trabalho se articulam com o racismo e o machismo. Na ausência de um Estado capaz de garantir direitos e redistribuir a riqueza, essas condições persistem em determinados territórios e grupos populacionais. A análise do caso equatoriano (2019–2023) em nível provincial mostra que a pobreza é determinada pela desigualdade, pela falta de serviços públicos, pela ausência de seguridade social, pelas disparidades étnicas e pela primarização da economia. Isso demonstra a prevalência de brechas estruturais que reproduzem a pobreza e a desigualdade.*

### **Palavras-chave**

1| Pobreza 2| Desigualdade 3| Seguridade 4| Brechas estruturais 5| Equador

## **Economic, Social, and Institutional Structures: The Reproduction of Poverty and Inequality in Ecuador**

### **Abstract**

*Poverty and inequality are not circumstantial issues nor solely determined by individual traits, but are perpetuated through the interaction of economic, social, and institutional structures. Low productivity, enclave economies, and precarious labor conditions intertwine with systemic racism and sexism. In the absence of a state capable of guaranteeing rights and redistributing wealth, these conditions persist in certain territories and population groups. The analysis of the Ecuadorian case (2019–2023) at the provincial level shows that poverty is shaped by inequality, lack of public services, absence of social security, ethnic disparities, and the primarization of the economy. This demonstrates the prevalence of structural gaps that reproduce poverty and inequality.*

### **Keywords**

1| Poverty 2| Inequality 3| Security 4| Structural Gaps 5| Ecuador

## Introducción<sup>1</sup>

La pobreza y la desigualdad en Ecuador son fenómenos estructurales profundamente arraigados en las configuraciones económica, social e institucional del país. Su persistencia no puede entenderse únicamente como una consecuencia de crisis coyunturales o decisiones individuales, sino como el resultado de dinámicas históricas y estructurales que han consolidado relaciones desiguales de poder, distribución y acceso a oportunidades. Estas estructuras afectan de manera desproporcionada a pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres y trabajadores informales, quienes enfrentan barreras sistemáticas para el ejercicio de derechos fundamentales y la mejora de sus condiciones de vida (Mideros, Fernández y Sánchez, 2024). En este sentido, la pobreza no se presenta como un fenómeno aislado, sino como una expresión compleja de exclusión territorial, vulnerabilidad institucional y desigualdades persistentes en el acceso a los bienes y servicios públicos.

Desde el punto de vista económico, Ecuador ha sostenido históricamente una estructura productiva centrada en la explotación de recursos naturales y la exportación de productos primarios. Este modelo extractivista ha generado una dependencia estructural de los ingresos provenientes del petróleo, el banano, las flores, el camarón y el cacao, lo que ha provocado ciclos de crecimiento económico seguidos de recesiones que afectan con mayor intensidad a los sectores más vulnerables (Sachs y Warner, 1995). A pesar de los periodos de bonanza, no se han producido transformaciones significativas en las condiciones de vida de las poblaciones más pobres, en parte porque la riqueza generada no se redistribuye territorialmente. Esta situación es evidente en provincias amazónicas como Sucumbíos y Orellana, que concentran recursos naturales estratégicos, pero registran niveles elevados de pobreza (Larrea, 2014).

El sector agrícola refuerza esta lógica de exclusión mediante una estructura altamente desigual. La concentración del acceso a la tierra y al agua en la Agricultura Empresarial contrasta con la precariedad de la Agricultura Familiar Campesina, responsable de la mayoría de las unidades productivas del país pero con acceso muy limitado a los factores de producción (FAO, s.f.; Martínez, 2013). Esta dualidad también se observa en el mercado laboral: sectores de baja productividad como la agricultura, el comercio y el transporte concentran el empleo, mientras que sectores de alta productividad como el petróleo o los servicios financieros generan

---

<sup>1</sup> Una versión previa de este artículo fue publicada en el libro *Diálogos para la Paz: Miradas desde la diversidad. Tomo II*, coordinado por Augusto Barrera, María Augusta Espín, Sebastián Granda Merchán y Ralf Oetzel, y publicado por Ediciones Abya-Yala en colaboración con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad Central del Ecuador y la Cooperación Alemana GIZ, en noviembre de 2024.

una parte considerable del valor agregado con escasa inclusión laboral (Mideros, Fernández y Sánchez, 2024). La alta informalidad, la precariedad y la escasa cobertura de protección social son expresión de esta segmentación, que limita la movilidad social y profundiza la desigualdad estructural (INEC, 2023).

Las desigualdades también se manifiestan en dimensiones étnicas, de género y territoriales. Las poblaciones indígenas y afrodescendientes se encuentran sobrerrepresentadas en los indicadores de pobreza multidimensional, analfabetismo, desempleo y acceso restringido a servicios básicos, como resultado de un legado histórico de discriminación y exclusión social. Asimismo, las mujeres –y en particular las mujeres indígenas y afrodescendientes– enfrentan una doble carga estructural: la responsabilidad del trabajo de cuidados no remunerado y la discriminación en el mercado de trabajo (Mideros y Fernández, 2021; Federici, 2012). Esta estructura de desigualdad de género, reproducida social y culturalmente, restringe su autonomía económica y refuerza patrones de dependencia que perpetúan la pobreza.

A lo anterior se suma la debilidad institucional, expresada en la provisión desigual de servicios públicos, la limitada capacidad de regulación económica y la ausencia del Estado en amplios territorios. Las provincias más empobrecidas coinciden con aquellas que presentan mayores niveles de inseguridad, configurando un patrón en el que la exclusión institucional y la violencia se retroalimentan. El incremento de los homicidios intencionales desde 2019 y la expansión del crimen organizado en provincias estratégicas evidencian la pérdida de control estatal sobre el territorio (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2023). Esta situación se inscribe en un patrón regional ya advertido por diversos autores, quienes han demostrado cómo la fragmentación institucional facilita el avance de actores ilegales y profundiza los ciclos de pobreza y violencia (Collier, 2007; Astorga y Shirk, 2010). La seguridad, entonces, debe ser entendida no solo como un bien público en disputa, sino también como un indicador del grado de integración territorial del Estado.

En este contexto, el presente estudio se plantea como objetivo general analizar cómo las estructuras económicas, sociales e institucionales se articulan en la reproducción de la pobreza y la desigualdad en las provincias del Ecuador en el período 2019-2023. A partir de este propósito, se propone identificar los patrones territoriales de pobreza y desigualdad; examinar las relaciones entre la desigualdad de ingresos, la informalidad laboral, la cobertura de seguridad social, la estructura productiva, el acceso a servicios públicos y la inseguridad con la incidencia de la pobreza monetaria y multidimensional; y, finalmente, discutir cómo los resultados empíricos permiten repensar el papel del Estado y las políticas públicas en la superación de la pobreza estructural.

Este enfoque se orienta a responder un conjunto de preguntas que guían la investigación: ¿qué características estructurales presentan las provincias con mayores niveles de pobreza y desigualdad en el Ecuador? ¿Cómo se relacionan la desigualdad de ingresos, el empleo informal, la cobertura de servicios y la inseguridad con la reproducción de la pobreza? ¿Qué rol juega la institucionalidad territorial en la explicación de las brechas provinciales de pobreza? Y, finalmente, ¿qué transformaciones serían necesarias en las estructuras económicas, sociales e institucionales para interrumpir el ciclo de empobrecimiento en el país? Estas preguntas se abordan mediante una estrategia metodológica que combina el análisis descriptivo territorial con un modelo econométrico a nivel provincial, en diálogo con un marco teórico estructural y multidimensional. En su conjunto, la investigación busca aportar al debate académico y a la formulación de políticas públicas con capacidad transformadora, superando los enfoques asistencialistas y focalizados que han predominado en el tratamiento de la pobreza en el Ecuador.

## Marco teórico

La comprensión contemporánea de la pobreza y la desigualdad ha trascendido las explicaciones centradas exclusivamente en la carencia de ingresos o en fallas individuales para insertarse en el mercado laboral. En lugar de enfoques reduccionistas, se ha avanzado hacia marcos interpretativos que reconocen estos fenómenos como expresiones de estructuras históricas de poder, exclusión y distribución desigual de recursos. Esta perspectiva implica entender la pobreza no como un accidente ni como una condición transitoria, sino como el resultado de sistemas económicos, sociales e institucionales que, al operar de manera desigual, producen y reproducen privaciones sistemáticas (Sen, 1999; Nussbaum, 2011). El cambio de paradigma desde el ingreso hacia las capacidades amplía el horizonte analítico, al introducir elementos como la libertad individual, la agencia, y la posibilidad de vivir con dignidad. Así, la pobreza no solo implica carencias materiales, sino también limitaciones en el acceso a oportunidades y en la participación activa en la vida social, económica y política.

El enfoque de capacidades propuesto por Amartya Sen (1999) considera que el desarrollo debe evaluarse en función de las libertades reales de las personas para vivir como valoran y tienen razones para valorar. Esta concepción se opone a la visión utilitarista o puramente monetaria, al destacar que una persona con el mismo ingreso puede experimentar condiciones de vida muy diferentes, dependiendo de su salud, entorno, género, pertenencia étnica, o acceso a servicios públicos. Martha Nussbaum (2011), en línea con esta perspectiva, identifica una lista de capacidades centrales (como la integridad física, la afiliación social o el control sobre el entorno)

que deben ser garantizadas para todos los seres humanos. En el campo de la medición, estas ideas han sido operacionalizadas por Alkire y Foster (2011), cuyo método de conteo permite identificar múltiples privaciones simultáneas, reflejando así la complejidad y la interseccionalidad de la pobreza. Esta visión es especialmente relevante en contextos como el ecuatoriano, donde la pobreza no puede entenderse solo como ingreso insuficiente, sino como la acumulación de carencias en dimensiones esenciales de la vida.

Paralelamente, en el análisis de la desigualdad, autores como Thomas Piketty (2014) han aportado evidencia empírica de que las economías capitalistas tienden de forma inherente a concentrar la riqueza, especialmente cuando no existen mecanismos robustos de redistribución fiscal y social. Su tesis de que el rendimiento del capital ( $r$ ) supera sistemáticamente el crecimiento económico ( $g$ ) implica que las élites tienden a incrementar su participación en la riqueza total con el tiempo, salvo en momentos excepcionales de intervención estatal intensa. Anthony Atkinson (2015) complementa esta visión al señalar que la desigualdad contemporánea es en gran medida producto de decisiones institucionales y políticas, como el debilitamiento de los sindicatos, la desregulación de los mercados financieros, y el estancamiento del salario mínimo. Joseph Stiglitz (2012), por su parte, argumenta que la desigualdad en Estados Unidos y en el mundo es consecuencia de un sistema económico “amañado” en favor de las élites económicas, quienes controlan las reglas del mercado, manipulan la política fiscal y restringen la competencia.

Estas contribuciones han revitalizado la economía política de la desigualdad, al demostrar que las disparidades en ingreso, riqueza y oportunidades no son inevitables, sino estructuradas por arreglos institucionales específicos. En América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020) ha sostenido que la desigualdad es una forma de ineficiencia sistémica, que impide el desarrollo sostenible y limita la cohesión social. La persistencia de altos niveles de desigualdad en la región se debe, entre otras causas, a la baja progresividad de los sistemas tributarios, la segmentación de los mercados laborales, el acceso desigual a la educación de calidad y la persistente concentración de activos productivos en manos de pocos.

Desde una lectura estructuralista, la economía latinoamericana ha sido caracterizada por su inserción dependiente y periférica en el sistema internacional, lo cual se refleja en una especialización productiva basada en la exportación de materias primas y productos agrícolas de bajo valor agregado. Raúl Prebisch (1950) y Celso Furtado (1974) ya advirtieron que este patrón genera ciclos de auge y crisis que impiden la acumulación de capacidades productivas locales y profundizan las desigualdades internas. En Ecuador, esta situación se manifiesta en la dependencia del

petróleo, el banano, el camarón y otros productos primarios, cuyo comportamiento en los mercados internacionales afecta directamente las finanzas públicas y las condiciones de vida de los sectores más vulnerables (Larrea, 2014). Este modelo, lejos de diversificar la economía, ha consolidado una estructura dual, en la que los beneficios de la extracción no se traducen en bienestar para las comunidades donde se produce la riqueza.

Además de las desigualdades económicas, resulta fundamental incorporar una perspectiva de género y etnicidad para entender la reproducción de la pobreza. La economía feminista ha mostrado cómo el trabajo de cuidados no remunerado, mayoritariamente realizado por mujeres, constituye una base invisible y no reconocida del sistema económico (Federici, 2012; Rodríguez Enríquez, 2015). Esta división sexual del trabajo reproduce desigualdades estructurales al limitar las oportunidades de inserción laboral, reducir el tiempo disponible para la educación o la participación política, y aumentar la dependencia económica. En Ecuador, como advierten Mideros y Fernández (2021), las mujeres –en particular las indígenas y afrodescendientes– enfrentan una doble carga de trabajo y condiciones de mayor informalidad, lo cual las posiciona en una situación de vulnerabilidad estructural difícil de revertir sin intervenciones públicas sostenidas.

La interseccionalidad, conceptualizada por Kimberlé Crenshaw (1989), permite comprender cómo la pobreza y la desigualdad no afectan de la misma manera a todas las personas, sino que se experimentan de forma diferenciada dependiendo de la posición que ocupen en múltiples sistemas de opresión. Esta mirada resulta clave para el análisis en contextos como Ecuador, donde las poblaciones indígenas, afrodescendientes y montuvias están sobrerrepresentadas en las estadísticas de pobreza multidimensional (INEC, 2023). La acumulación de desventajas históricas, territoriales y socioculturales da lugar a formas de exclusión persistentes que requieren políticas públicas con enfoque étnico y territorial.

El concepto de violencia estructural, propuesto por Johan Galtung (1990), agrega una dimensión ética y política al análisis. Galtung argumenta que existe violencia no solo cuando se ejerce daño físico, sino también cuando estructuras sociales e institucionales impiden que las personas desarrollen su potencial. Paul Farmer (2003) retoma esta idea para mostrar cómo la pobreza extrema, el acceso desigual a servicios de salud o el abandono institucional constituyen formas de violencia que acortan la vida y limitan las posibilidades de bienestar. En el caso ecuatoriano, la falta de presencia estatal en ciertas provincias, el crecimiento del crimen organizado y el deterioro de la seguridad ciudadana pueden interpretarse como manifestaciones de esa violencia estructural, que refuerza el ciclo de exclusión y limita las posibilidades de desarrollo sostenible (Astorga y Shirk, 2010; Collier, 2007).

Por último, el análisis territorial de la pobreza permite identificar patrones espaciales de exclusión que no pueden ser explicados solo por las dinámicas individuales. La geografía del empobrecimiento en Ecuador revela que las provincias de la Amazonía, la Sierra centro y Esmeraldas concentran múltiples privaciones debido a procesos históricos de desinversión pública, concentración de tierras, baja institucionalidad y marginación étnica (Mideros y Sánchez, 2024). Esta territorialización de la pobreza exige enfoques analíticos subnacionales que visibilicen las brechas estructurales invisibilizadas en los promedios nacionales. Como plantea la CEPAL (2020), el desarrollo inclusivo requiere políticas redistributivas con enfoque territorial, capaces de revertir los patrones históricos de exclusión espacial.

En conjunto, este marco teórico articula enfoques que reconocen la pobreza y la desigualdad como procesos estructurales, multidimensionales y territorializados. Su análisis exige superar los modelos lineales de crecimiento económico y focalizarse en la redistribución del poder, la justicia social y el fortalecimiento de capacidades humanas e institucionales. Solo una lectura crítica y compleja de estos fenómenos puede orientar políticas públicas que rompan con la reproducción de la exclusión en Ecuador.

## Metodología

El estudio analiza las condiciones de empobrecimiento y desigualdad socioeconómica en Ecuador durante el período 2019-2023, un lustro en el cual se han presentado una serie de factores que dan cuenta de los procesos de reproducción de la pobreza y la desigualdad tanto en el ámbito político-institucional que marca el rol económico y de planificación del Estado, como en la presencia y acción de grupos de delincuencia organizada, y en el impacto de la pandemia de la COVID-19. Estos elementos, internos y externos, interactúan y afectan de manera heterogénea a diferentes territorios y grupos poblacionales, destacando las interrelaciones entre pobreza, desigualdad, inseguridad y estructura económica.

La investigación emplea dos estrategias complementarias: (i) análisis descriptivo de indicadores sociales, económicos y de seguridad a nivel territorial durante el período 2019-2023, utilizando fuentes oficiales; y (ii) evaluación de la relación entre pobreza, inseguridad y estructura económica, mediante un modelo econométrico utilizando una base de datos de panel a nivel territorial. Esta segunda estrategia permite observar patrones estructurales entre variables, incorporando heterogeneidades provinciales y estructurales en el análisis.

Las fuentes de datos incluyen al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) desde la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) y la Matriz de Femicidios; el Ministerio del Interior (MDI), con datos relacionados con criminalidad y seguridad pública; y el Banco Central del Ecuador (BCE), en lo referente a estadísticas económicas. Las variables seleccionadas responden a una lógica teórica de análisis estructural, en la cual se busca observar cómo interactúan factores económicos (productividad y empleo), sociales (desigualdad, etnicidad, acceso a servicios), e institucionales (seguridad) en la reproducción de la pobreza.

El análisis se realiza a nivel provincial, dado que las provincias constituyen unidades intermedias de política pública, planificación territorial y expresión institucional. Además, permiten captar mejor la heterogeneidad estructural del país en términos económicos, sociales y étnico-territoriales, así como evaluar la distribución del aparato estatal. El uso de información a este nivel permite observar de forma más precisa las desigualdades espaciales que no se perciben a escala nacional.

En cuanto al tratamiento temporal, el análisis descriptivo se enfoca en la comparación entre los años 2019 y 2023, con el objetivo de identificar los cambios recientes y la evolución de los indicadores en un período marcado por la pandemia y el deterioro de las condiciones de seguridad. Esta comparación permite ilustrar las tendencias y contrastes más recientes en las condiciones territoriales. Por su parte, el modelo econométrico utiliza información anual desde 2019 hasta 2023, y construye así un panel provincial con cinco años de observación. Esta estructura permite captar tanto la variación temporal como las heterogeneidades espaciales, fortaleciendo la identificación estadística y el análisis de relaciones estructurales persistentes entre las dimensiones económicas, sociales e institucionales y la pobreza.

Las variables e indicadores constan en la siguiente tabla:

**Tabla 1. Variables e indicadores**

| Dimensión     | Variable             | Indicadores                                                            |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Social        | Pobreza              | Pobreza por ingresos.<br>Pobreza multidimensional.                     |
|               | Desigualdad          | Índice de desigualdad de Gini por ingresos.                            |
|               | Servicios públicos   | Tasa de asistencia a educación superior.<br>Tasa de embarazo infantil. |
|               | Demográficos         | Autoidentificación étnica                                              |
| Económico     | Trabajo              | Cobertura de seguridad social.                                         |
|               | Producción           | Valor Agregado Bruto (VAB).                                            |
|               | Estructura económica | Sectorización del empleo.                                              |
| Institucional | Seguridad            | Tasa de homicidios.                                                    |

Fuente: Elaboración propia.

La selección de variables utilizadas en los modelos responde a una articulación explícita con el marco teórico estructural, multidimensional e interseccional desarrollado en este estudio. Las variables de desigualdad de ingresos, estructura económica (empleo en el sector primario y VAB per cápita) y cobertura de seguridad social permiten operacionalizar los enfoques de Piketty (2014), Stiglitz (2012) y la CEPAL (2020), que señalan cómo la concentración del ingreso, la segmentación laboral y la desprotección institucional son factores determinantes en la reproducción de la pobreza. Asimismo, la inclusión de variables demográficas como la autoidentificación étnica y el embarazo infantil se fundamenta en las perspectivas feministas e interseccionales de Crenshaw (1989) y Federici (2012), al reflejar dimensiones de discriminación estructural vinculadas al género, la etnicidad y la edad. La tasa de homicidios intencionales, por su parte, permite incorporar la noción de violencia estructural (Galtung, 1990; Farmer, 2003) como expresión de la debilidad institucional y su impacto en las condiciones de vida. Finalmente, la tasa de asistencia a educación superior se basa en el enfoque de capacidades de Sen (1999) y Nussbaum (2011), que subraya la centralidad de la educación en la expansión de libertades y oportunidades.

Los indicadores de prevalencia de pobreza por ingresos, pobreza multidimensional, tasa neta de asistencia a la educación superior, tasa de empleo en el sector primario (agrícola, minas y petróleo) y la cobertura de seguridad social fueron obtenidos a partir de indicadores tabulados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), utilizando la metodología del INEC y con un procesamiento propio para su desagregación por provincias.

Por otra parte, la tasa de homicidios intencionales (cada 10.000 habitantes) fue tabulada a partir de la base de datos de Homicidios Intencionales del Ministerio del Interior (MDI). Es importante señalar que la categoría de homicidios intencionales incluye muertes por sicariato, feminicidio, otros homicidios y asesinatos. El coeficiente de Gini fue obtenido de los tabulados presentados por el INEC en la ENEMDU acumulada anual. La tasa de embarazo infantil (cada 1.000 niñas) se obtuvo a partir del registro administrativo de Nacidos Vivos y Defunciones Fetales del INEC, que incluye casos de niñas entre 10 y 14 años. Finalmente, el valor agregado bruto por habitante fue obtenido de las cuentas regionales presentadas por el Banco Central del Ecuador.

Para la evaluación de las relaciones entre las diferentes dimensiones, se emplea una estrategia de regresiones territoriales con el fin de explorar tanto correlaciones como relaciones causales. En este sentido, se ajustaron ocho modelos de regresión, estructurados para responder distintas hipótesis sobre la relación entre la pobreza (como variable

dependiente) y las dimensiones estructurales. Se utilizaron tanto la pobreza por ingresos como la pobreza multidimensional como variables endógenas, explorando su relación con indicadores de desigualdad, empleo, estructura productiva, institucionalidad y violencia.

La estimación de ocho modelos responde a una lógica metodológica orientada a capturar la complejidad estructural de la pobreza, en línea con enfoques multidimensionales como el de Alkire y Foster (2011), que recomiendan descomponer las privaciones para comprender la interacción entre distintos factores. Además, siguiendo a Kanbur y Lustig (2000), la desagregación por dimensiones económicas, sociales e institucionales permite analizar el peso relativo de cada estructura, lo que resulta clave para orientar intervenciones diferenciadas. La utilización de metodologías alternativas (MCO y MC2E) también permite controlar problemas de endogeneidad y robustecer los hallazgos, como sugieren Ravallion (2016) y Bourguignon, Ferreira y Lustig (2005), quienes destacan la importancia de evaluar tanto efectos directos como mecanismos indirectos en el estudio de la pobreza y la desigualdad.

Cada modelo introduce combinaciones distintas de variables independientes o metodologías econométricas, con el fin de identificar robustez, sensibilidad y patrones comunes. Los modelos se estructuran de la siguiente manera: los modelos I y II emplean como variable dependiente la pobreza por ingresos; los modelos III y IV, la pobreza multidimensional; los modelos I y III usan mínimos cuadrados ordinarios (MCO); mientras que los modelos II y IV aplican mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E), incorporando una variable instrumental. Los modelos V a VIII repiten esta misma estructura, pero utilizando subconjuntos de variables independientes (por dimensión) para identificar el peso relativo de lo económico, social o institucional.

Previamente, todas las variables fueron normalizadas para mitigar las distorsiones derivadas de la heterogeneidad estructural entre provincias. Esta estrategia permite comparar coeficientes entre variables medidas en distintas escalas, e interpretar los resultados en términos de desviaciones estándar.

El objetivo de este enfoque es identificar las relaciones estructurales y potencialmente causales entre la pobreza y las dimensiones analizadas. En el primer modelo, por ejemplo, se estima la incidencia de la pobreza por ingresos mediante una regresión lineal múltiple:

$$(1) y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k + u$$

En esta especificación, las variables independientes representan factores económicos, sociales e institucionales que pueden incidir sobre la pobreza. No obstante, el uso de MCO puede generar problemas de

endogeneidad, particularmente por variables omitidas que afectan tanto a los regresores como al término de error. Para corregir este problema, se aplica el método de Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (MC2E), utilizando como instrumento la variable “Puerto Marítimo”, que toma el valor de 1 si la provincia cuenta con un puerto. Este instrumento se considera válido por su relación con la estructura productiva y comercial, pero no con la pobreza directamente.

El modelo MC2E se desarrolla en dos etapas. En la primera, se estima la variable potencialmente endógena en función del instrumento. En la segunda, se reemplaza la variable original por su valor estimado, garantizando así la consistencia de los coeficientes:

$$(2) \hat{x}_1 = \pi_0 + \pi_1 Z + v$$

$$(3) y = \beta_0 + \beta_1 \hat{x}_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_k x_k + u$$

Esta estrategia econométrica permite fortalecer la validez de los resultados al controlar por problemas de endogeneidad, ofreciendo así una base más sólida para interpretar las relaciones estructurales entre pobreza, desigualdad e institucionalidad territorial.

## Resultados

La pobreza y la desigualdad en Ecuador no son problemáticas coyunturales, ni están determinadas únicamente por características individuales. Estas condiciones emergen de una interacción compleja entre estructuras económicas, sociales e institucionales que, históricamente, han perpetuado privaciones y desigualdades. De acuerdo con Mideros y Sánchez (2024), desde 1989, se evidencia cómo esta problemática ha evolucionado, reflejando privaciones estructurales en educación, empleo y vivienda. Por ejemplo, en 2000, la pobreza multidimensional a nivel nacional alcanzó el 66,54%, con tasas desproporcionadamente altas en áreas rurales (83,09%) frente a las urbanas (59,82%). Aunque desde 2007 se observa una reducción sostenida, en 2021 se reportó un aumento, destacando la persistencia de factores estructurales que afectan el bienestar.

En el periodo 2019-2023, las provincias amazónicas, la Sierra centro y Esmeraldas se han consolidado como los territorios más empobrecidos, con tasas de pobreza multidimensional que superan el 50% (ver Gráfico 1). Esto da cuenta de una mayor incidencia de carencias estructurales relacionadas con la privación de derechos. Por ejemplo, en la dimensión educativa, las privaciones permanecen constantes en aproximadamente el 60% de la población considerada pobre. De manera similar, en la dimensión del empleo, las personas en situación de pobreza carecen, en

promedio, del 43% de los indicadores relacionados, según el análisis de Mideros y Sánchez (2024).

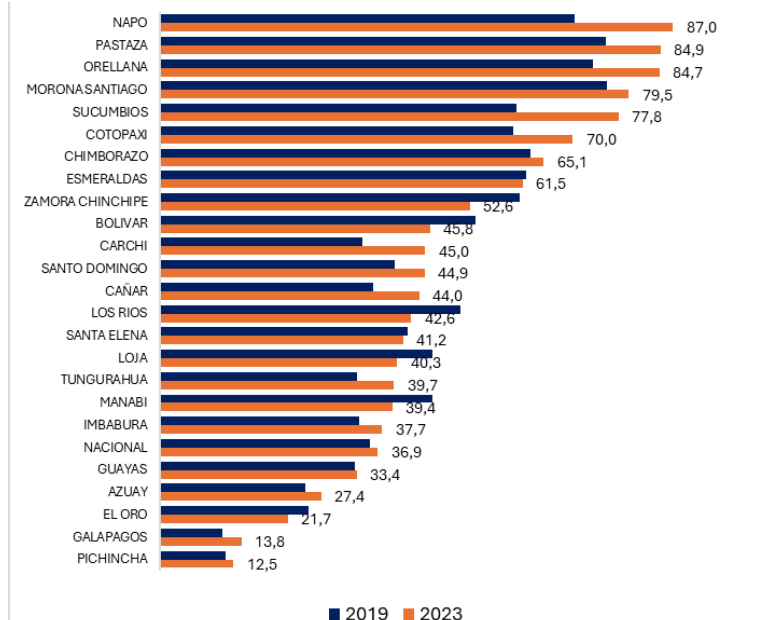
Estas desigualdades estructurales se evidencian con mayor claridad al analizar indicadores relacionados con educación y salud, dimensiones clave para el desarrollo humano. Entre 2019 y 2022, la tasa de embarazo infantil mostró un incremento, pasando de 1,19 a 1,26 por cada 1.000 niñas, con valores más altos en provincias como la Amazonía, Esmeraldas y Los Ríos. Este fenómeno no solo refleja la falta de acceso a educación sexual y servicios de salud, sino también está estrechamente vinculado con la violencia y el abuso sexual, que afectan niñas en estos territorios. Estas desigualdades también son notorias en el acceso a la educación superior: aunque a nivel nacional la tasa neta de asistencia creció marginalmente de 17,4% a 18,4% en el mismo periodo, provincias como Morona Santiago y Napo apenas alcanzaron el 5%, mientras que Pichincha y Azuay superaron el 25%.

La desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, refleja un entorno marcado por brechas territoriales. Las provincias amazónicas, junto con Carchi, Esmeraldas, Loja e Imbabura, seguido de Cotopaxi, Chimborazo, presentan los niveles más altos de desigualdad, con valores que exceden el promedio nacional (ver Gráfico 2). Esta dinámica evidencia disparidades económicas profundamente arraigadas que responden tanto a factores históricos como a la ausencia de políticas redistributivas efectivas enfocadas en estos territorios. Tal como señalan Mideros y Sánchez (2024), las brechas territoriales son un reflejo de las inequidades estructurales que perpetúan la exclusión en áreas clave como educación, salud y empleo, limitando así las oportunidades de desarrollo equitativo.

Estas desigualdades tienen una dimensión étnica que no puede ignorarse. El 17,5% de la población se autoidentifica como indígena, afroecuatoriana o montuvia, con mayores concentraciones en la Amazonía y la Sierra centro (ver Gráfico 3). Según Mideros y Sánchez (2024), la población indígena enfrenta las tasas más elevadas de pobreza multidimensional, seguida de cerca por la población montuvia. Particularmente vulnerables son los grupos de adultos mayores indígenas y montuvios, así como niños, niñas y adolescentes indígenas, quienes registran tasas de pobreza multidimensional superiores al 80%, que los consolida como los sectores más empobrecidos de la sociedad. Este panorama evidencia cómo la etnicidad amplifica las condiciones de exclusión y privación, perpetuando las desigualdades estructurales históricas en el país.

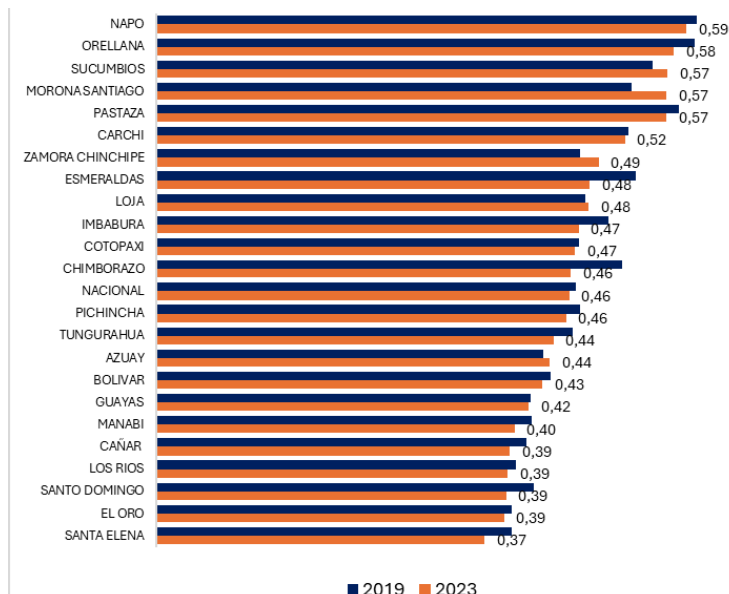
Tramas  
y Redes  
Jun. 2025  
N°8  
ISSN  
2796-9096

Gráfico 1. Tasa de pobreza multidimensional (porcentaje), 2019-2023



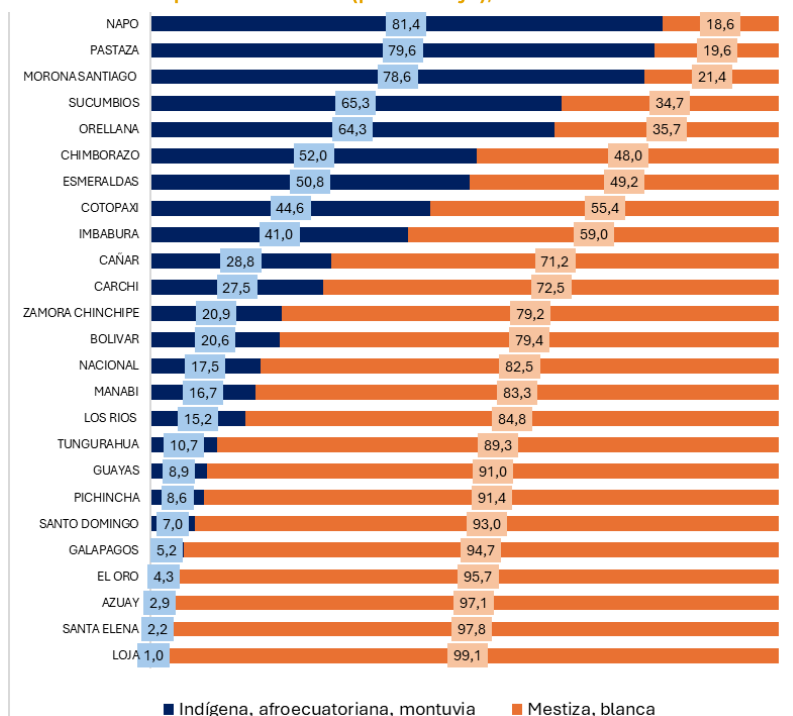
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2019-2023).

Gráfico 2. Índice de Gini, 2019-2023



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2019-2023).

Gráfico 3. Composición étnica (porcentaje), 2023



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2019-2023).

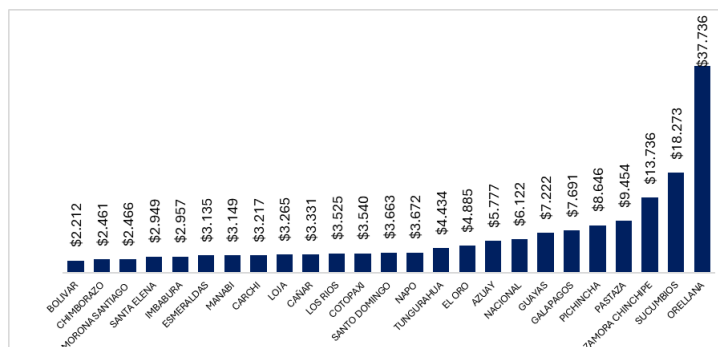
El análisis de los determinantes de la pobreza por ingresos y multidimensional en Ecuador para el período 2019-2023 revela patrones estructurales importantes. Las estimaciones, realizadas mediante modelos de regresión territorial con variables normalizadas, permiten identificar el impacto de distintas dimensiones institucionales, sociales y económicas sobre la pobreza. A continuación, se presentan los resultados de los modelos sobre la pobreza por ingresos, así como de aquellos que analizan la pobreza multidimensional.

En el ámbito económico, las desigualdades se manifiestan a través del Valor Agregado Bruto (VAB) per cápita y la estructura productiva. Entre 2019 y 2022, el VAB per cápita creció un promedio anual del 1,7%, y alcanzó USD 6.122 en 2022 (ver Gráfico 4). Sin embargo, provincias como Esmeraldas y Chimborazo registraron caídas de hasta el -13%, mientras que provincias extractivas como Orellana y Zamora Chinchipe crecieron más del 7%, impulsadas por actividades petroleras y mineras. Esta dinámica refleja una estructura económica dominada por actividades primarias de baja productividad, que concentran más del 50% del empleo en la Amazonía y la Sierra, mientras que en provincias como Pichincha y Guayas predominan los servicios y la manufactura (ver Gráfico 5).

Tramas  
y Redes  
Jun. 2025  
Nº8  
ISSN  
2796-9096

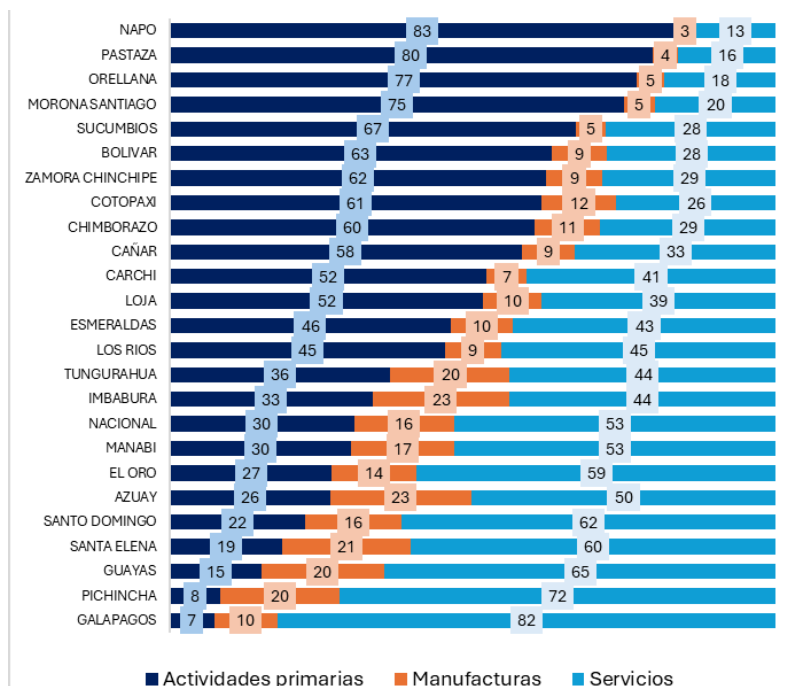
ANDRÉS MIDEROS MORA  
CAROLINA SÁNCHEZ PILCO

**Gráfico 4. Valor Agregado Bruto (VAB) per cápita en dólares de 2018, 2022**



Fuente: Elaboración propia ajustado con año base 2018 (100 = 2018) a partir de las Cuentas Regionales del Banco Central del Ecuador (BCE).

**Gráfico 5. Estructura del empleo, 2023**



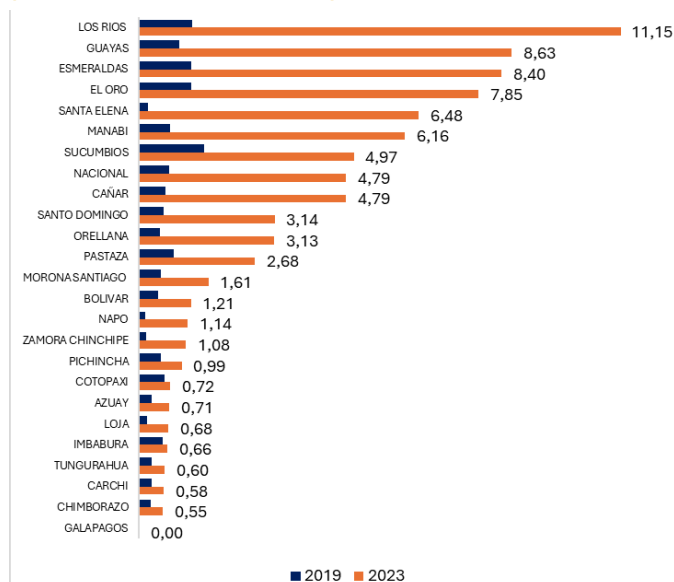
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2019-2023).

La precariedad laboral y la falta de acceso a seguridad social también son factores clave en esta problemática. Según datos de la ENEMDU anual, entre 2019 y 2023, el empleo en el sector informal aumentó del 22,95%

al 24,83%. Este incremento fue más pronunciado en las provincias de la Amazonía, seguidas por Bolívar, Chimborazo, Loja y Cotopaxi, que registraron los mayores porcentajes de empleo informal. Este fenómeno tiene una correlación directa con el deterioro de la cobertura de seguridad social, que pasó del 37,2% en 2019 al 32,0% en 2023. Las provincias amazónicas, junto con Esmeraldas, Santo Domingo, Santa Elena y las de la Sierra centro, no solo presentan los niveles más bajos de acceso a la seguridad social, sino que también experimentaron las mayores reducciones en los últimos años.

La inseguridad es otro factor que impacta en el bienestar de la población en Ecuador. Entre 2019 y 2023, la tasa de homicidios intencionales registró un alarmante incremento, cuando pasó de 0,70 a 4,79 por cada 10.000 habitantes, según datos del Ministerio del Interior. Este aumento fue especialmente notable en provincias como Los Ríos, Guayas y Esmeraldas, que alcanzaron tasas de 11,15, 8,63 y 8,40, respectivamente, muy por encima del promedio nacional. En contraste, las provincias de la Sierra presentaron tasas más bajas, lo que pone de manifiesto disparidades territoriales en materia de seguridad (ver Gráfico 6). Este escenario refleja no solo una crisis institucional, sino también la creciente incidencia de dinámicas de violencia relacionadas con problemas estructurales como el narcotráfico y la falta de políticas públicas efectivas para garantizar derechos.

**Gráfico 6. Homicidios intencionales**  
(tasa cada 10.000 habitantes), 2019-2023



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior (2019-2023).

En síntesis, Ecuador presenta una heterogeneidad marcada en la relación entre pobreza y desigualdad con sus estructuras sociales, económicas e institucionales. La Amazonía, la Sierra centro y Esmeraldas son las provincias más empobrecidas, caracterizadas por altos niveles de desigualdad, carencias en educación, salud y seguridad social, y una economía basada en actividades primarias. Además, estos territorios concentran una mayor presencia de pueblos indígenas, afroecuatorianos y montuvios. La Sierra centro y Esmeraldas destacan por su baja productividad reflejada en un reducido VAB per cápita, con Esmeraldas también una de las provincias más afectadas por la inseguridad.

En los modelos que explican la pobreza por ingresos (Modelos I y II), uno de los resultados más relevantes es el impacto de la desigualdad de ingresos, medida a través del coeficiente de Gini. Un incremento de una desviación estándar en la desigualdad de ingresos se asocia con un incremento de 0,3173 desviaciones estándar en la pobreza por ingresos (Modelo I). Este resultado indica que en las provincias donde la desigualdad de ingresos es más alta, se espera un aumento proporcional en la pobreza por ingresos, lo cual pone de relieve la relación estructural entre la concentración de ingresos y el empobrecimiento. En términos prácticos, esto implica que las políticas que no aborden directamente la desigualdad tendrán un impacto limitado en la reducción de la pobreza, ya que la distribución del ingreso sigue siendo un determinante clave.

La tasa de embarazo infantil, como proxy de la falta de promoción de la salud y oportunidades para las mujeres jóvenes, tiene un impacto positivo en el Modelo I. Un aumento de una desviación estándar en esta variable se relaciona con un incremento de 0,1330 desviaciones estándar en la pobreza por ingresos. Este hallazgo revela la interrelación entre la salud reproductiva y la pobreza, destacando que las provincias con mayores tasas de embarazo infantil tienden a experimentar niveles más altos de pobreza por ingresos.

En cuanto a la cobertura de seguridad social, los coeficientes negativos en los Modelos I y II (respectivamente -0,3782 y -0,5220) indican que un aumento de una desviación estándar en la cobertura de seguridad social está vinculado con una reducción de la pobreza por ingresos en 0,3782 y 0,5220 desviaciones estándar respectivamente. Estos resultados subrayan el papel que desempeña la protección social y la calidad del empleo en mitigar la pobreza, ya que las provincias con mayor acceso a la seguridad social tienen menores niveles de pobreza.

Tabla 2. Resultados de las regresiones territoriales para la pobreza por ingresos en Ecuador

| Especificación                                                           |  | (I)                  | (II)            | (III)                    | (IV)            | (V)           | (VI)           | (VII)         | (VIII)        |
|--------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Variables dependientes (normalizadas)                                    |  | Pobreza por ingresos |                 | Pobreza multidimensional |                 |               |                |               |               |
| Unidad                                                                   |  | Provincia            | Provincia       | Provincia                | Provincia       | Provincia     | Provincia      | Provincia     | Provincia     |
| Años                                                                     |  | 2019 a 2023          | 2019 a 2023     | 2019 a 2023              | 2019 a 2023     | 2019 a 2023   | 2019 a 2023    | 2019 a 2023   | 2019 a 2023   |
| Modelo                                                                   |  | Lineal               | Lineal IV       | Lineal                   | Lineal IV       | Efectos fijos | Ef. aleatorios | Efectos fijos | Efectos fijos |
| Instrumento                                                              |  |                      | Puerto marítimo |                          | Puerto marítimo |               |                |               |               |
| Número de observaciones                                                  |  | 120                  | 120             | 120                      | 120             | 120           | 120            | 120           | 120           |
| R <sup>2</sup>                                                           |  | 0.9797               | 0.9041          | 0.9839                   | 0.8441          | 0.7695        | 0.8249         | 0.7597        | 0.7971        |
| Variables independientes (normalizadas)                                  |  |                      |                 |                          |                 |               |                |               |               |
| Razón de homicidios intencionales                                        |  | 0.0633               | 0.2021          | -0.0947*                 | 0.1791          | -0.0947***    | -0.0861**      | -0.0717***    | -0.0911***    |
|                                                                          |  | [0.0397]             | [0.3115]        | [0.0502]                 | [0.4224]        | [0.0446]      | [0.0424]       | [0.0360]      | [0.0296]      |
|                                                                          |  | 0.3173***            | 0.5135***       | 0.1073*                  | 0.2274          | 0.1073**      | 0.1625**       |               |               |
| Coeficiente de gini para desigualdad de ingreso                          |  | [0.0849]             | [0.1273]        | [0.0613]                 | [0.1453]        | [0.0544]      | [0.0648]       |               |               |
|                                                                          |  |                      |                 |                          |                 |               |                | -0.1906***    |               |
| Tasa neta de asistencia a educación superior                             |  |                      |                 |                          |                 |               |                | [0.0415]      |               |
| Porcentaje de población autoidentificada como blanca o mestiza           |  |                      |                 |                          |                 |               |                |               | -0.4808***    |
| Tasa de embarazo infantil                                                |  | 0.1330**             | 0.0878          | 0.1098                   | 0.1377          | 0.1098*       | 0.1737***      | 0.0516        | 0.0514        |
|                                                                          |  | [0.0641]             | [0.0865]        | [0.0734]                 | [0.1418]        | [0.0652]      | [0.0592]       | [0.0599]      | [0.0485]      |
| Valor Agregado Bruto por habitante                                       |  | 0.1305               | -0.0705         | 0.1174                   | 0.0664          | 0.1174        | 0.1327         | 0.0756        | 0.0360        |
|                                                                          |  | [0.1859]             | [0.0572]        | [0.1549]                 | [0.0851]        | [0.1375]      | [0.1136]       | [0.1231]      | [0.1172]      |
| Porcentaje de empleo en el sector primario (agrícola, minas y petróleos) |  | 0.0482               | 0.1600          | 0.0337                   | 0.4648***       | 0.0337        | 0.1602***      | 0.0526        | 0.0135        |
|                                                                          |  | [0.0389]             | [0.0976]        | [0.0595]                 | [0.1120]        | [0.0529]      | [0.0519]       | [0.0491]      | [0.0539]      |
| Cobertura de seguridad social                                            |  | -0.3782***           | -0.5220***      | -0.4271***               | -0.4426***      | -0.4271***    | -0.4643***     | -0.4334***    | -0.2024**     |
|                                                                          |  | [0.0872]             | [0.1789]        | [0.1156]                 | [0.1712]        | [0.1027]      | [0.0977]       | [0.1075]      | [0.0882]      |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Servicios de Rentas Internas, Secretaría Nacional de Planificación, Ministerio del Interior y Banco Central del Ecuador. Nota: Los coeficientes son interpretados en términos de desviaciones estándar. Los valores de significancia están indicados de la siguiente manera: p < 0.1 (\*), p < 0.05 (\*\*), p < 0.01 (\*\*\*), correspondientes a valores críticos de 1.645, 1.960 y 2.576, respectivamente.

Tramas  
y Redes  
Jun. 2025  
Nº8  
ISSN  
2796-9096

ANDRÉS MIDEROS MORA  
CAROLINA SÁNCHEZ PILCO

El Valor Agregado Bruto (VAB) por habitante no presenta un impacto estadísticamente notable en los modelos de pobreza por ingresos, lo que sugiere que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para reducir la pobreza si no se acompaña de políticas redistributivas y de inclusión social. Este resultado es consistente con la idea de que el crecimiento económico no garantiza automáticamente una mejora en la distribución del bienestar, y que la desigualdad debe ser abordada de manera directa.

En cuanto a la inseguridad, si bien se observa una relación directa con la pobreza esta no es estadísticamente significativa en ninguna de las dos especificaciones, lo que implica una relación, pero condicionada además por otros factores territoriales o específicos de la acción del crimen organizado. En este sentido, una posible razón de la falta de significancia estadística es la presencia de territorios empobrecidos de la Sierra centro y la Amazonía en donde es relativamente menor la presencia de grupos de delincuencia organizada en los años de análisis.

En los modelos que explican la pobreza multidimensional (Modelos III a VIII), se observa un patrón similar en cuanto al impacto de la desigualdad y la seguridad social, pero con algunas diferencias importantes en el comportamiento de otras variables.

La desigualdad de ingresos, medida nuevamente a través del coeficiente de Gini, muestra una relación positiva en los Modelos V y VI (0,1073 y 0,1625 desviaciones estándar, respectivamente). Un aumento de una desviación estándar en la desigualdad de ingresos se asocia con un aumento correspondiente en la pobreza multidimensional. Este hallazgo refuerza la idea de que las provincias con mayores desigualdades no solo enfrentan mayores niveles de pobreza por ingresos, sino que también están afectadas en múltiples dimensiones del bienestar. Es decir, la desigualdad no solo impacta los ingresos, sino que se extiende a otras áreas como el acceso a la educación, la salud y la vivienda, exacerbando las privaciones múltiples que caracterizan la pobreza multidimensional.

En el porcentaje de empleo en el sector primario (Modelo VI), un aumento de una desviación estándar en esta variable se asocia con un incremento de 0,1602 desviaciones estándar en la pobreza multidimensional. Este resultado revela que las provincias con una mayor concentración de empleo en sectores primarios (agricultura, ganadería, pesca y silvicultura) tienden a experimentar mayores niveles de pobreza multidimensional. Esto es consistente con la baja productividad y la precariedad laboral que suelen caracterizar a estos sectores, los cuales no generan empleos de calidad ni oportunidades de desarrollo sostenibles.

La cobertura de seguridad social sigue siendo un determinante clave en todos los modelos de pobreza multidimensional, con coeficientes negativos que oscilan entre -0,2024 y -0,4643 desviaciones estándar

en los Modelos V a VIII. Esto confirma que el acceso a la seguridad social actúa como un amortiguador contra las privaciones múltiples. Las provincias con mayor cobertura de seguridad social tienden a tener niveles más bajos de pobreza multidimensional, lo que pone de manifiesto la importancia de fortalecer los sistemas de protección social, especialmente en contextos donde la informalidad laboral es alta.

La tasa de asistencia neta a la educación superior tiene un coeficiente negativo en el Modelo VII (-0,1906 desviaciones estándar), lo que sugiere que un aumento en la cobertura educativa se traduce en una reducción significativa de la pobreza multidimensional. La educación es un factor clave para mejorar las capacidades de las personas y su capacidad para salir de la pobreza. Las provincias con mayores tasas de acceso a la educación superior tienen menores niveles de pobreza multidimensional.

Finalmente, el porcentaje de población autoidentificada como blanca o mestiza muestra un coeficiente negativo y significativo al 99% en el Modelo VIII (-0,4808). Esto indica que las provincias con un mayor porcentaje de población autoidentificada como blanca o mestiza tienden a tener menores niveles de pobreza multidimensional. Este hallazgo pone de relieve cómo la etnicidad sigue siendo un factor importante en la distribución de las oportunidades económicas y el acceso a servicios, lo que confirma la persistencia de discriminaciones estructurales que afectan a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, quienes sufren mayores niveles de pobreza multidimensional.

Los resultados evidencian que la pobreza en Ecuador está profundamente ligada a factores estructurales como la desigualdad de ingresos, la limitada cobertura de seguridad social, las disparidades étnicas y la concentración laboral en sectores de baja productividad, como el primario. La desigualdad de ingresos y la falta de acceso a la seguridad social desempeñan un papel central en la persistencia de la pobreza, mientras que las diferencias étnicas intensifican las privaciones multidimensionales, afectando principalmente a poblaciones indígenas, montuvias y afrodescendientes. Según Mideros y Sánchez (2024), la inacción del Estado frente a estas problemáticas ha permitido que las lógicas de mercado profundicen las desigualdades, perpetuando estructuras económicas y sociales marcadas por la discriminación y la violencia. En este contexto, el rol del Estado es crucial para garantizar el bienestar y reducir las brechas existentes mediante la regulación y redistribución, dado que la ausencia de estas acciones ha demostrado ser un obstáculo para el desarrollo.

## Discusión

Los resultados obtenidos permiten confirmar empíricamente la hipótesis central de esta investigación: la pobreza y la desigualdad en Ecuador se reproducen a partir de estructuras económicas, sociales e institucionales que interactúan y se territorializan, afectando desproporcionadamente a determinados grupos poblacionales y regiones históricamente excluidas. Esta conclusión, sustentada en datos de 2019 a 2023 y basada en modelos econométricos y análisis descriptivo a nivel provincial, se alinea con una tradición teórica crítica que entiende la pobreza no como una falla individual ni como una condición coyuntural, sino como una manifestación de relaciones de poder históricas, configuraciones productivas desiguales y mecanismos de exclusión sistemática (Sen, 1999; Stiglitz, 2012; Nussbaum, 2011).

En primer lugar, el resultado más sólido y consistente se refiere al impacto de la desigualdad de ingresos. En el Modelo I, se observa que un aumento de una desviación estándar en el coeficiente de Gini se asocia con un incremento de 0,3173 desviaciones estándar en la pobreza por ingresos, y en el Modelo II este efecto asciende a 0,5135. De forma similar, la desigualdad muestra un coeficiente de 0,1073 en el Modelo V (pobreza multidimensional). Esta fuerte asociación estadística confirma que la pobreza no puede analizarse separada de las estructuras distributivas: la concentración de ingresos no solo incrementa la distancia entre grupos sociales, sino que, como advierte Piketty (2014), limita las capacidades de redistribución del Estado y reduce la eficacia de las políticas sociales. En contextos como el ecuatoriano, con sistemas fiscales poco progresivos y baja inversión pública en protección social, la desigualdad actúa como un determinante directo del empobrecimiento, validando lo planteado por Atkinson (2015) y Stiglitz (2012): las desigualdades no son inevitables, sino resultado de decisiones políticas y arreglos institucionales que privilegian a ciertos sectores sociales.

De manera complementaria, la variable de cobertura de seguridad social muestra una relación negativa y altamente significativa en todos los modelos. En el Modelo II, un incremento de una desviación estándar en esta variable se traduce en una reducción de 0,522 desviaciones estándar en la pobreza por ingresos. En el Modelo VI, que explica la pobreza multidimensional, este efecto es de -0,4643. Estos datos empíricos refuerzan los postulados de la CEPAL (2020), que sostiene que los sistemas de protección social son herramientas redistributivas cruciales en contextos de alta informalidad. El vínculo entre la cobertura de seguridad social y la pobreza, tanto monetaria como multidimensional, es indicativo de que el empleo precario y la desprotección institucional constituyen factores estructurales de vulnerabilidad. Las provincias con

menores niveles de cobertura, como Esmeraldas, Santo Domingo y las de la Amazonía, coinciden con aquellas que registran mayores niveles de pobreza, lo cual demuestra que sin un sistema de seguridad social robusto e inclusivo, la movilidad social se ve seriamente restringida.

En el plano productivo, los resultados muestran que no es el nivel agregado de producción el que importa, sino su estructura y distribución. El Valor Agregado Bruto (VAB) per cápita no presenta una relación estadísticamente significativa con la pobreza, lo que sugiere que el crecimiento económico, si no es redistributivo ni diversificado, no garantiza mejoras en el bienestar. En 2022, el VAB per cápita promedio nacional alcanzó los USD 6.122, pero provincias como Chimborazo y Esmeraldas experimentaron caídas de hasta -13%, mientras otras como Orellana y Zamora Chinchipe crecieron más del 7% por su dinamismo extractivo. Sin embargo, este crecimiento no se traduce en menores niveles de pobreza, lo cual corrobora el planteamiento de Larrea (2014) respecto al carácter enclave de la economía extractivista en Ecuador. El coeficiente positivo de la variable “porcentaje de empleo en el sector primario” en el Modelo VI (0,1602) indica que aquellas provincias donde predomina el empleo agrícola o extractivo presentan niveles más altos de pobreza multidimensional. Esto está en línea con las tesis estructuralistas de Prebisch (1950) y Furtado (1974), quienes argumentaron que la inserción periférica de América Latina en el comercio mundial, basada en materias primas de bajo valor agregado, genera desigualdad interna y dependencia externa, sin generar encadenamientos productivos que favorezcan a las mayorías.

Desde una perspectiva social, el estudio identifica mecanismos específicos de reproducción intergeneracional de la pobreza. La tasa de embarazo infantil se asocia positivamente con la pobreza por ingresos en el Modelo I (coeficiente de 0,1330), revelando una relación clara entre la falta de derechos sexuales y reproductivos y la exclusión económica. Esta relación se refuerza en el análisis descriptivo: entre 2019 y 2022, el embarazo infantil aumentó de 1,19 a 1,26 por cada mil niñas, siendo particularmente elevado en provincias como Morona Santiago y Esmeraldas. Estos hallazgos son consistentes con la literatura feminista que ha señalado cómo la maternidad temprana limita el acceso a la educación, al trabajo remunerado y a la autonomía económica (Federici, 2012; Rodríguez Enríquez, 2015). En Ecuador, esta dinámica se agrava por la escasa presencia de servicios públicos integrales en salud y educación sexual, lo que perpetúa ciclos de pobreza entre mujeres jóvenes, especialmente en contextos indígenas y rurales.

El acceso a la educación superior, por su parte, se asocia con menores niveles de pobreza multidimensional, con un coeficiente de -0,1906 en el Modelo VII. Esta relación empírica reafirma el enfoque de

capacidades de Sen (1999) y Nussbaum (2011), en el que la educación es entendida como una herramienta de libertad y agencia. Sin embargo, el análisis territorial revela una concentración de oportunidades: mientras provincias como Pichincha y Azuay registran tasas netas de asistencia a educación superior superiores al 25%, en Morona Santiago y Napo apenas alcanzan el 5%. Esta brecha evidencia la existencia de un patrón de exclusión territorial estructural, en el cual el acceso al conocimiento y a las oportunidades de desarrollo se encuentra profundamente condicionado por el lugar de nacimiento. Este fenómeno refuerza el planteamiento de la CEPAL (2020), que propone el enfoque de desarrollo territorial inclusivo como una estrategia clave para superar la pobreza estructural en América Latina.

La dimensión étnico-racial emerge como un eje estructurante de la desigualdad. El Modelo VIII muestra que un mayor porcentaje de población autoidentificada como blanca o mestiza se asocia con niveles más bajos de pobreza multidimensional (coeficiente de -0,4808), lo cual implica que las provincias con mayor proporción de población indígena o afroecuatoriana tienden a experimentar niveles más altos de privación. Esta evidencia empírica se alinea con los hallazgos del INEC (2023), que reportan tasas de pobreza multidimensional superiores al 80% entre niños indígenas y montuvios. El vínculo entre etnicidad y pobreza confirma los planteamientos de Crenshaw (1989) sobre interseccionalidad, y refuerza la necesidad de reconocer la discriminación estructural como un factor de empobrecimiento. Esta dimensión étnica de la exclusión, muchas veces invisibilizada en el diseño de políticas públicas, evidencia que la pobreza es también una forma de marginación cultural, simbólica e histórica.

Finalmente, la variable de homicidios intencionales, aunque no presenta coeficientes estadísticamente significativos en la mayoría de modelos, refleja una situación crítica en el análisis territorial. Entre 2019 y 2023, la tasa de homicidios se incrementó en más del 574%, pasando de 0,70 a 4,79 por cada 10.000 habitantes a nivel nacional, con picos extremos en provincias como Los Ríos (11,15), Guayas (8,63) y Esmeraldas (8,40). Estas provincias coinciden con altos niveles de pobreza, informalidad y debilidad institucional. Aunque la relación estadística no es concluyente, esta evidencia empírica valida el concepto de violencia estructural de Galtung (1990), en el cual el Estado, al fallar en garantizar condiciones básicas de seguridad y bienestar, reproduce formas de violencia que afectan más intensamente a los sectores empobrecidos. Como advierte Farmer (2003), esta violencia institucional acorta la vida, limita el acceso a servicios y profundiza la exclusión, configurando un círculo vicioso entre pobreza, inseguridad y fragmentación estatal.

En suma, los resultados permiten sostener que la pobreza en Ecuador no es una consecuencia natural del subdesarrollo, ni un problema atribuible a decisiones individuales. Es el producto de estructuras históricas de desigualdad que se expresan en el territorio y que requieren transformaciones profundas del modelo económico, del rol del Estado y de la distribución de poder. La pobreza es estructural porque está anclada en relaciones de acumulación, desposesión, discriminación y violencia que se han perpetuado a través del tiempo. Romper con esta lógica exige una acción estatal robusta, redistributiva y transformadora, que reconozca la territorialidad, la interseccionalidad y la multidimensionalidad de la pobreza como condiciones esenciales para la justicia social.

## Conclusiones

Este estudio ha permitido demostrar que la pobreza y la desigualdad en Ecuador no son fenómenos coyunturales ni explicables únicamente por condiciones individuales o por deficiencias momentáneas del crecimiento económico. Por el contrario, son el resultado de una configuración estructural que articula tres dimensiones profundamente interconectadas: una economía dependiente y segmentada, una sociedad atravesada por desigualdades históricas de clase, etnia y género, y un Estado cuya debilidad institucional limita su capacidad para garantizar derechos, redistribuir riqueza y responder eficazmente a los desafíos del desarrollo.

El análisis territorial y econométrico desarrollado para el período 2019-2023, con base en fuentes oficiales, ha evidenciado la existencia de un patrón estructural de empobrecimiento que afecta con particular intensidad a la Amazonía, la Sierra centro y la provincia de Esmeraldas. Estas regiones concentran, simultáneamente, bajos niveles de acceso a servicios públicos esenciales, altas tasas de informalidad, presencia significativa de pueblos indígenas y afrodescendientes, una estructura productiva dominada por el sector primario y, en algunos casos, elevados niveles de inseguridad. Estas condiciones no son aleatorias, sino expresión territorial de desigualdades estructurales acumuladas históricamente, en coherencia con lo planteado por Sen (1999), Nussbaum (2011), la CEPAL (2020) y la literatura latinoamericana sobre dependencia y exclusión.

Los resultados empíricos reafirman la hipótesis de que la pobreza se explica por factores estructurales y no exclusivamente por niveles de ingreso. El hecho de que la pobreza esté directamente correlacionada con la desigualdad, la cobertura de seguridad social, la estructura económica y variables demográficas como el embarazo infantil o la autoidentificación étnica demuestra que su reproducción está asociada a procesos de exclusión institucionalizada, a la falta de reconocimiento de derechos, y a

la ausencia de mecanismos redistributivos eficaces. Esto valida, en el caso ecuatoriano, la pertinencia de enfoques teóricos que conciben la pobreza como una forma de privación multidimensional e interseccional, producto de relaciones de poder más que de carencias puntuales.

Asimismo, la desconexión entre crecimiento económico y reducción de la pobreza, reflejada en la no significancia del VAB per cápita en los modelos estimados, plantea interrogantes sobre la eficacia del modelo de desarrollo vigente. La persistencia de la pobreza en provincias con alta producción petrolera o minera pone en evidencia el carácter enclave del extractivismo ecuatoriano, donde la riqueza generada no se traduce en bienestar local. Esto sugiere que el cambio estructural no puede limitarse a impulsar el crecimiento agregado, sino que debe centrarse en transformar las bases productivas del país, con inclusión territorial y social.

Finalmente, la investigación permite extraer una conclusión de carácter político: el rol del Estado es indispensable para romper los ciclos de pobreza estructural. Los resultados señalan que las provincias con mayor cobertura de seguridad social, mejor acceso a educación superior y menores tasas de desigualdad presentan menores niveles de pobreza. Esto implica que el diseño e implementación de políticas públicas integrales, universales y territorializadas, no solo es posible, sino necesario para revertir las condiciones que reproducen la pobreza. Las transformaciones requeridas no son técnicas, sino estructurales: redistribuir el ingreso, reconocer la diversidad étnica y territorial, proteger el trabajo y garantizar el acceso equitativo a servicios públicos básicos.

## Referencias

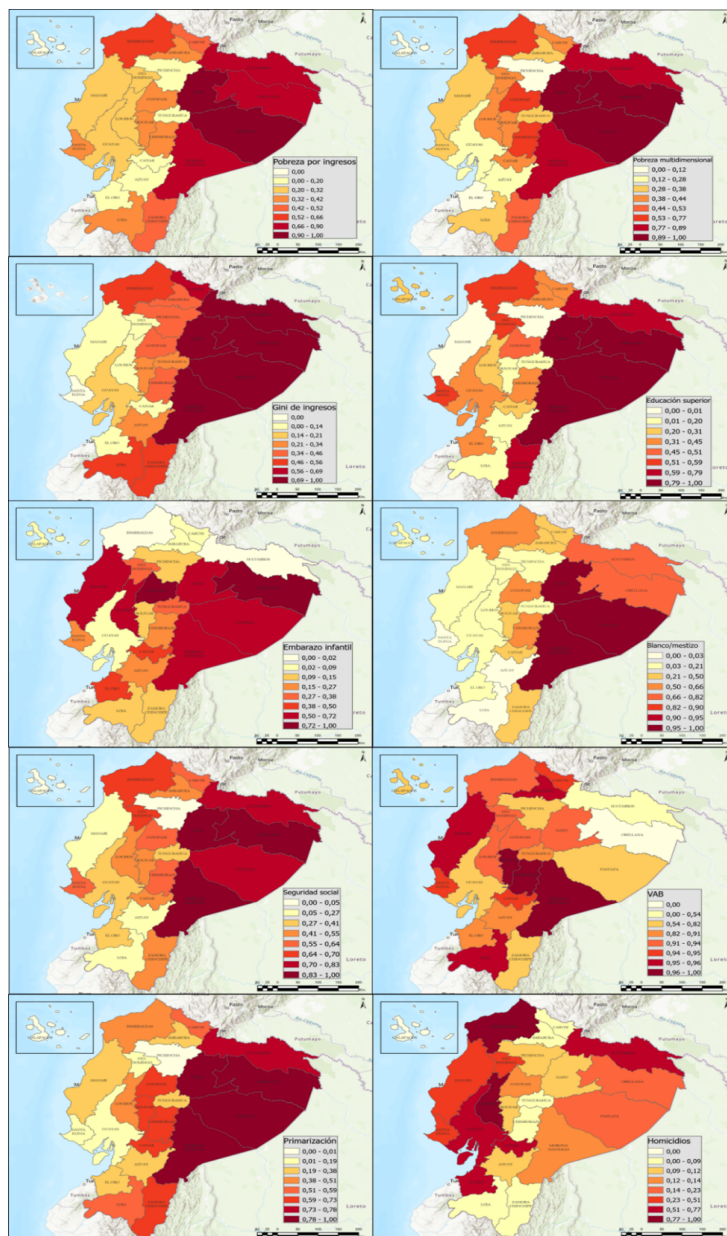
- Acemoglu, Daron y Robinson, James (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Nueva York: Crown Publishers.
- Alkire, Sabina y Foster, James (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, 95 (7-8), 476-487.
- Arellano, Marcela (2022). *Sindicalismo para transformar el trabajo y la vida*. Quito: FES-Ecuador.
- Astorga, Luis y Shirk, David (2010). *Drug trafficking organizations and counter-drug strategies in the U.S.-Mexican context*. San Diego: Center for U.S.-Mexican Studies, UC San Diego.
- Atkinson, Anthony B. (2015). *Inequality: What can be done?* Cambridge: Harvard University Press.
- CEPAL (2018). *La ineficiencia de la desigualdad*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

- Collier, Paul (2007). *The Bottom Billion: Why the poorest countries are failing and what can be done about it*. Oxford: Oxford University Press.
- Crenshaw, Kimberlé (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex. *University of Chicago Legal Forum*, 1, 139-167.
- FAO (2012). *Marco Estratégico de Mediano Plazo de Cooperación de la FAO en Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe, 2012-2015*. <https://www.fao.org/4/as169s/as169s.pdf>
- Farmer, Paul (2003). *Pathologies of power: Health, human rights, and the new war on the poor*. Oakland: University of California Press.
- Federici, Silvia (2012). *Revolution at point zero: housework, reproduction, and feminist struggle*. Oakland: PM Press.
- Galtung, Johan (1990). Cultural violence. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291-305.
- González, Fernán (2014). *Poder y violencia en Colombia*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- INEC (2019). *Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres - ENVIGMU*. Quito: INEC.
- INEC (2022). *Registro Estadístico de Defunciones Generales*. Quito: INEC.
- INEC (2023). *Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. Anual*. Quito: INEC.
- Larrea, Ana Ma. (2004). *El movimiento indígena ecuatoriano: participación y resistencia*. Buenos Aires: CLASCO.
- Larrea, Carlos (2014). *¿Existen alternativas frente al petróleo en la Amazonía Centro-sur?* Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Martínez, Luciano (2013). *La agricultura familiar en el Ecuador*. Quito: RIMISP.
- Massal, Julie (2000). Movimientos sociales, democratización y multiculturalismo. En Julie Massal, y Marcelo Bonilla (Eds.), *Los movimientos sociales en las democracias andinas* (pp. 157-192). Quito: FLACSO.
- Mideros, Andrés y Fernández, Nora (2021). *El bienestar como tarea pendiente en Ecuador: hacia nuevos pactos para garantizar la protección social universal*. Quito: FES-Ecuador.
- Mideros, Andrés y Sánchez, Carolina (2024). El bienestar y la pobreza multidimensional en el Ecuador entre 1980 y 2022. En Andrés Mideros, Xavier Jara, y M. Gabriela Palacio (Eds.), *Política social, pobreza y desigualdad en el Ecuador: 1980 - 2021* (pp. 326-382). Quito: EdiPUCE.
- Mideros, Andrés, Fernández, Nora y Sánchez, Carolina (2024). Brechas estructurales en el Ecuador: retos y transformaciones para

- el desarrollo. En *Pobreza y desigualdad: análisis de brechas*. Quito: EdiPUCE.
- Nussbaum, Martha (2011). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Cambridge: Harvard University Press.
- Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (2023). *Boletín anual de homicidios intencionales en Ecuador*. PADF.
- OMS (marzo de 08 de 2021). Violencia contra la mujer. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
- Piketty, Thomas (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge: Harvard University Press.
- Piketty, Thomas (2014). *Century, Capital in the Twenty-First*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rodríguez, Corina (2012). La cuestión del cuidado: ¿El eslabón perdido del análisis económico? *Revista CEPAL*, 106, 23-36.
- Sachs, Jeffrey D. y Warner, Andrew M. (1995). *Natural Resource Abundance and Economic Growth*. NBER Working Paper Series, 5398. [https://www.nber.org/system/files/working\\_papers/w5398/w5398.pdf](https://www.nber.org/system/files/working_papers/w5398/w5398.pdf)
- Santillana, Alejandra, y Aguinaga, Margarita (2012). *El movimiento de las mujeres y feministas del Ecuador*. Quito: IEE.
- Sen, Amartya (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Stiglitz, Joseph E. (2012). *The Price of Inequality*. Nueva York: W.W. Norton y Company.
- UNFPA (2020). *Socioeconomic consequences of adolescent pregnancy in six Latin American countries*. Panamá: UNFPA.

## Anexos

Gráfico A.1: Mapa de variables normalizadas



Fuente: Elaboración propia. Variables normalizadas para comparación entre provincias. Se utilizan datos de 2023 de pobreza por ingresos y multidimensional, índice de Gini, privación de acceso a educación superior y seguridad social, porcentaje de población indígena-afroecuatoriana-montuvia, y porcentaje de empleo en actividades primarias; el promedio entre 2019 y 2022 de la tasa de embarazo infantil; el promedio entre 2018 y 2022 del VAB; y el promedio entre 2019 y 2023 de la tasa de homicidios intencionales.

